

La agenda de seguridad en América Latina. Dos concepciones.

La definición de seguridad que está siendo empleada por la administración Bush no es nueva para el campo de la ciencia política, ni tampoco para el de los estudios de seguridad y defensa. La seguridad ha sido, desde siempre, un concepto polémico y debatido en su propia esencia. Sin embargo, sólo en épocas recientes se ha aceptado ampliamente que la seguridad no es algo que compete únicamente a los Estados ni al elemento militar

Verónica Domínguez Pousada



El ascendente debate sobre “la soberanía compartida”: sus implicancias en América Latina

por Fabián Calle
Pág. 14

PERFILES:

Soledad Alvear: la moderación y sensatez al poder

La candidata presidencial de la Democracia Cristiana, Soledad Alvear, es un atípico ejemplo para la política latinoamericana: dirigente previsible, meticulosa, analítica y ordenada, su desempeño profesional ha estado totalmente alejado de cualquier tipo de improvisación.

Por Pedro Isern

Pág. 12

RESEÑAS:

Argentina y Brasil en el mundo luego de la Guerra Fría

Marzo en Latinoamérica: balance político de la región

Crisis en Bolivia Brasil camina con sus propias piernas Las armas de Chávez

Por Matías Franchini
Pág. 5

La agenda de seguridad en América Latina.

Dos concepciones.

Por Verónica Domínguez Pousada*

31 de marzo de 2005

Desde hace algunos meses, tanto la CIA como el Departamento de Estado han comenzado a dar alertas en relación a la situación de la región latinoamericana. Venezuela, Colombia, México y Bolivia -entre otros- se han convertido en fuentes de preocupación para Washington, pero no precisamente por temas ya tradicionales como el narcotráfico, la guerrilla o la violencia urbana. Populismo, debilidad del régimen político y falta de transparencia son los nuevos blancos de la estrategia de seguridad del gobierno norteamericano. En una reciente entrevista en el Washington Post (El Universal, Domingo 27 de marzo de 2005), la secretaria de Estado de Estados Unidos, Condoleezza Rice, advirtió que “las diferencias económicas en América Latina se están convirtiendo en terreno fértil para un tipo de populismo y demagogia que no son deseables para la región latinoamericana”. Asimismo, manifestó que “se requiere un nuevo enfoque para que los gobiernos democráticos hagan lo mejor para sus pueblos”, buscando acabar con factores nocivos como la corrupción, la brecha en la educación y la salud, y los sistemas

políticos débiles incapaces de rendir cuentas. Por su parte, el director de la CIA, Porter Gross, había sostenido que “las numerosas elecciones programadas para los próximos meses en la región representan un potencial foco de inestabilidad” (La Nación, Domingo 27 de marzo de 2005). Analistas políticos latinoamericanos por su parte, contrarrestan advirtiendo las alarmantes implicancias de esta nueva concepción de la seguridad norteamericana. Fenómenos que antes eran considerados auspiciosos y merecedores de apoyo, como las elecciones y su contribución a la consolidación de una democracia siquiera procedimental; ahora son vistos desde Washington con preocupación. Y esta vuelta de tuerca en la estrategia de seguridad no está siendo recibida con agrado en la región.

¿Una nueva forma de entender la seguridad?

La definición de seguridad que está siendo empleada por la administración Bush no es nueva para el campo de la ciencia política, ni tampoco para el de los estudios de seguridad y

defensa. La seguridad ha sido, desde siempre, un concepto polémico y debatido en su propia esencia. Sin embargo, sólo en épocas recientes se ha aceptado ampliamente que la seguridad no es algo que compete únicamente a los Estados ni al elemento militar (Barbé y Perni, 2003:5).

En este sentido ha sido clave la investigación de Barry Buzan (1991:432), quien ha definido el concepto de seguridad como “liberarse de la amenaza y ser capaz, bien sean los Estados o las sociedades, de mantener su independencia en lo que se refiere a su identidad, y a su integración funcional, frente a fuerzas de cambio consideradas hostiles”. También Buzan, junto a Waever y de Wilde (1998), ha sido el creador del concepto de “securitización” o securización. El mismo sostiene que frente a un tema que se presenta como una amenaza existencial y que requiere acciones de emergencia que van más allá del procedimiento político normal, ese determinado sector de la realidad cambia de estatus y llega a verse relacionado con el término “seguridad”, siendo incorporado en la agenda de seguridad.

La Nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos se mueve dentro del esquema de la securitización. La amenaza principal es el terrorismo que, a diferencia de los enemigos enfrentados antes o durante la Guerra Fría, no puede identificarse claramente con un territorio o una autoridad (un Estado). Por eso, el discurso y el pensamiento estratégico norteamericano han ido desarrollando “una creciente preocupación (...) por la existencia de Estados fracasados y de zonas desprovistas de gobierno y control”; que se ha ido plasmando en un razonamiento lógico que “sería algo así: la corrupción, la debilidad institucional, el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo son factores que están en condiciones de retroalimentarse. Frente a ello, la presencia de los Estados y sus instituciones es la garantía de romper ese círculo infernal” (Calle, 2003:1-4).

En este marco, si bien América Latina no ostentaría a priori mayores desafíos en términos de proliferación de armas de destrucción masiva, carreras armamentistas de equipamiento convencional, o terrorismo radicalizado o catastrófico; sí es

La Nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos se mueve dentro del esquema de la securitización. La amenaza principal es el terrorismo que, a diferencia de los enemigos enfrentados antes o durante la Guerra Fría, no puede identificarse claramente con un territorio o una autoridad (un Estado).

una de las regiones más corruptas e institucionalmente débiles del mundo. Entonces, los países latinoamericanos no presentan hoy una amenaza para los Estados Unidos, pero sí tienen todas las condiciones para ser considerados un terreno fértil para el desarrollo de amenazas a mediano o largo plazo (en especial zonas como la Triple Frontera -con énfasis en Paraguay-, el área andina -con énfasis en Bolivia-, Colombia y algunos estados mexicanos, como por ejemplo Sinaloa). Ante este escenario, la administración Bush estaría anticipándose y securitizando una relación que, tradicionalmente, se había mantenido dentro de los canales exclusivamente políticos (promoción de la democracia y del Estado de Derecho) o económicos (asistencia oficial al desarrollo, liberación del comercio, integración).

Hasta aquí no advertiríamos mayores complicaciones, pero repasemos una vez más la definición de securitización. En ella se mencionaban no sólo la inclusión de un tema anteriormente excluido dentro de la agenda de seguridad, sino también su percepción como una amenaza existencial y que exigiría acciones de emergencia que van más allá del procedimiento político normal. Ahora bien, ¿presenta la debilidad institucional latinoamericana una “amenaza existencial” para los Estados Unidos? Si la respuesta es afirmativa, ¿exige acciones de emergencia más allá de los procedimientos políticos normales? Y, en tal caso, ¿de qué acciones estaríamos hablando?.

El peligro que entraña el esquema de la securitización es el “paso del dicho al hecho”; es decir, todos podemos coincidir en el diagnóstico, pero los desacuerdos surgen a la hora de consensuar o implementar las medidas que parecen seguirse “lógica y naturalmente” del mismo. Algo similar ha sucedido en años anteriores con los temas de narcotráfico o degradación medioambiental que, al securitizarse, dieron paso a la ingerencia (como mínimo teórica o de formulación de políticas) militar en temas que anteriormente le estaban vedados. Esta apertura no estuvo exenta de polémica en los países latinoamericanos, siempre tan celosos de la tajante división entre los asuntos civiles y militares que su historia reciente les ha hecho adoptar. Y más allá de la polémica por el coyuntural desajuste que introduce en una relación habitualmente cooperativa, el principal inconveniente que esta diferencia de enfoque generó fue la falta de acción coordinada y efectiva entre los Estados Unidos y América Latina para abordar los problemas mencionados.

Una lectura institucionalista de la seguridad

Como afirmáramos previamente, la definición amplia de seguridad que adopta la nueva Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) de los Estados Unidos (y que incorpora variables propiamente políticas al análisis) no es algo nuevo en el campo de la ciencia política. Los estudios neoinstitucionalistas de las transiciones hacia la democracia y la posterior consolidación de sistemas democráticos ya enfatizaban la importancia de la presencia de instituciones estatales, normas, autoridades, servicios) en todo el territorio nacional para garantizar la plena vigencia de las reglas de la poliarquía. Un clásico de este tipo de estudios, Guillermo O’Donnell, advertía en su obra “Contrapuntos” acerca de uno de los problemas más típicos que dificulta la plena institucionalización de las democracias latinoamericanas; a saber, la disparidad de situaciones dentro de un mismo Estado, con “áreas verdes” como oasis de seguridad física, económica y jurídica conviviendo con “áreas marrones” como focos de violencia, desigualdad, corrupción y ausencia de Estado.

Este diagnóstico es claramente coincidente con los postulados de la ESN y, más importante aún, con la realidad latinoamericana. Quizás con la excepción de Uruguay y Chile (dado que las regiones más extremas de este país están escasamente pobladas), no hay país en la región que no presente enormes disparidades entre sus zonas, las cuales actúan como catalizadores de conflictos políticos, económicos, sociales y también de seguridad. No hace falta llegar a la Triple Frontera para ver esta situación en la Argentina; basta con analizar el “Estado provincial criminal” que intentó dismantelar la intervención federal en la provincia de Santiago del Estero; o lo que sucede en algunas zonas del segundo cordón del conurbano bonaerense con la connivencia de delincuentes (secuestradores, narcotraficantes y de otras clases), fuerzas de seguridad y representantes de los poderes del Estado. Algo similar sucede en el nordeste brasilero, aún controlado por los coroneles (caudillos locales) para quienes no existe la igualdad ante la ley; o en las grandes urbes cercadas por “favelas” donde el narcotráfico y el crimen organizado han alcanzado impresionantes niveles de interconexión con otros grupos criminales (colombianos, por ejemplo) y de sofisticación en su armamento, su accionar financiero y su poder de corromper autoridades. Las mismas diferencias

Mientras los Estados Unidos siguen de cerca los procesos de reforma a los cuerpos de policía y los planes de radarización, o la sanción de leyes contra el lavado de dinero (entre otros temas); los neoinstitucionalistas van más allá y abogan por una mayor igualdad económica y social, sumada a un progresivo cambio en la educación, los valores cívicos y la “cultura política” (cuestión que da pie para un inmenso debate sobre el alcance de estos temas).

en la calidad del Estado y sus instituciones las advertimos en Bolivia al comparar Santa Cruz de la Sierra (que reclama cada vez más autonomía) con el resto del territorio; en Perú entre la costa y la sierra; en Venezuela entre Caracas y la frontera con Colombia (que deja pasar más de lo que detiene); en Colombia entre Bogotá y la anterior zona desmilitarizada y bajo control de las FARC (donde poco a poco comienzan a volver las autoridades municipales); y en México entre el DF y los estados fronterizos (salvoconductos de los traficantes de estupefacientes y personas, donde hasta los gobernadores están implicados en las redes de financiamiento corrupto), o dentro del mismo DF.

¿Mismo diagnóstico, mismas políticas?

Llegada la cuestión de las soluciones que se proponen es donde percibimos una cierta diferencia entre la aplicación norteamericana de la securitización y las prescripciones neoinstitucionalistas (remitimos a las fuentes por razones de extensión). Ambos abogan por más y mejor Estado para los países latinoamericanos, pero el énfasis en qué instituciones estatales reformar, la secuencia de los pasos, las áreas prioritarias, la asignación de responsabilidades y el origen de los recursos para llevar a cabo las transformaciones requeridas son relativamente diferentes. Por ejemplo, mientras los Estados Unidos siguen de cerca los procesos de reforma a los cuerpos de policía y los planes de radarización, o la sanción de leyes contra el lavado de dinero (entre otros temas); los neoinstitucionalistas van más allá y abogan por una mayor igualdad económica y social, sumada a un progresivo cambio en la educación, los valores cívicos y la “cultura política” (cuestión que da pie para un inmenso debate sobre el alcance de estos temas).

Encontrando el punto en común

Ahora bien, no existiría en principio una contradicción entre los objetivos de uno y otro set de políticas, sino simplemente un alcance diferente. Las recomendaciones de las autoridades norteamericanas apuntan a cuestiones instrumentales muy necesarias y llegan hasta donde la ingerencia de un país en los asuntos de otro les permiten llegar. Las recomendaciones neoinstitucionalistas aluden, en cambio, a cuestiones de fondo que demandan profundos

Quizás con la excepción de Uruguay y Chile (dado que las regiones más extremas de este país están escasamente pobladas), no hay país en la región que no presente enormes disparidades entre sus zonas, las cuales actúan como catalizadores de conflictos políticos, económicos, sociales y también de seguridad.

cambios internos, con gran consenso social y liderazgo político para llevarse a cabo. Estados Unidos no parecería, en principio, oponerse a estos cambios, siempre y cuando se hagan progresivamente y dentro de un determinado marco jurídico (en clara alusión contraria a la “revolución Bolivariana” de Chávez). Asimismo, parecería mucho más consciente que en otros períodos históricos de que no puede motorizar o instrumentar estos cambios por sí mismo. Restará ver si, a raíz de su enorme preocupación por la seguridad y las condiciones que la hacen posible, **futuro** se muestra más dispuesto a respaldar (retórica, política, técnica y económicamente) procesos de cambio en las direcciones señaladas, diseñados y

decididos en forma consensuada por las propias sociedades latinoamericanas y sus gobiernos.

***Verónica Domínguez Pousada** es Lic. en Ciencias Políticas (UCA) y Máster en Acción Política (Un. Fr. de Vitoria, España). Profesora adscripta a la cátedra “Problemas Políticos Internacionales” (UCA). Se desempeña en el sector privado haciendo trabajos de consultoría.

Fuentes: Diario EL UNIVERSAL. Diario LA NACIÓN.

BARBÉ, E. y PERNI, O. (2003) Más allá de la seguridad nacional. Universidad Autónoma de Barcelona. Barcelona.

BUZAN, B. (1991) People, State and Fear. An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era. Harvester Wheatsheaf. New York.

BUZAN, B., WEAVER, O. y de WILDE, J. (1998) Security. A New Framework for Analysis. Lynne Rienner Publishers. Boulder-London.

CALLE, F. (2003) Los lineamientos estratégicos de los EE. UU. post 11-9: algunas de sus implicancias internacionales y hemisféricas. Buenos Aires.

O'DONNELL, G. (1997) Contrapuntos. Editorial Paidós. Buenos Aires.

Marzo en Latinoamérica: balance político de la región

Por Matías Franchini*

5 de abril de 2005

Sin lugar a dudas, el hecho que acaparó la atención pública en Latinoamérica durante el mes de marzo fue la crisis desatada en Bolivia tras la presentación de la renuncia del Presidente de Bolivia Carlos Mesa y que amenazó por momentos con revivir trágicos episodios del pasado cercano. Esta situación llevo a varios países de la región a expresar su preocupación y declararse en favor de la continuidad institucional del castigado país andino. Sin embargo, los movimientos políticos en Bolivia se desarrollaron sin tener que lamentar lesiones permanentes a las instituciones democráticas, al menos por el momento.

Otros episodios de relevancia, aunque de menor intensidad, ocurridos durante el ultimo mes han sido el anuncio del gobierno brasileño de Lula Da Silva de no renovar su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en momentos en que los mercados internacionales parecen comenzar a dar la espalda a las economías emergentes; las preocupaciones regionales en torno a una eventual carrera armamentista en la región motivada por la decisión del Presidente venezolano Hugo Chávez de renovar el armamento de las fuerzas armadas y finalmente, la profundización de las disputas hacia el interior de la gobernante Concertación chilena de cara a las presidenciales de diciembre de 2005, tras las polémicas declaraciones del Presidente Lagos en favor de la precandidata socialista Michele Bachelet (ver Isern Pedro, “Soledad Alvear: La moderación y sensatez al poder” en esta edición de Paper).

Crisis en Bolivia: un capítulo más

Cercado por una serie de medidas de fuerza (cortes de ruta, bloqueos) llevadas adelante por sus principales opositores y argumentando que bajo las imperantes condiciones no podía seguir gobernando, el presidente Carlos Mesa anunciaba el domingo 6 de marzo su decisión de someter su continuidad en el cargo al congreso, presentando a la consideración de los legisladores su renuncia. “He decidido presentar al país, presentar a la consideración del país, a la consideración de ustedes ciudadanos y ciudadanas de Bolivia como me manda la Constitución, mediante el Congreso Nacional mi renuncia al cargo de Presidente Constitucional de Bolivia”. Daba inicio así a un nuevo capítulo en la turbulenta historia reciente de Bolivia.

El detonante de la renuncia fue el anuncio del líder opositor Evo Morales (Movimiento Al Socialismo: MAS) de que daría inicio a una serie de bloqueos de rutas en el centro del país, como forma de presionar para la aprobación de una polémica ley de hidrocarburos (ver adelante). A esto se sumaba el ya vigente paro de actividades en la localidad del Alto, liderada por otro referente de la oposición, el presidente de las juntas vecinales de El Alto Abel Mamani¹. El presidente Mesa fue claro en su discurso: llegaba al límite de su trabajo, en su estancia en el poder había atendido más de 800 conflictos, “por todo el momento que estamos viviendo, y porque como persona tengo que ser consistente éticamente, tengo que decir que yo no voy a gobernar en función de las locuras que me plantee cualquier sector”. El mandatario no dudó en identificar a estos grupos, al reprochar duramente el comportamiento de Evo Morales, Abel Mamani, los cívicos cruceños y el empresariado en general. Más claras aun fueron las palabras del canciller Juan Ignacio Siles “El gobierno ha estado 16 meses permanentemente chantajeado por distintos grupos de extrema derecha y de extrema izquierda, lo que ha significado un bloqueo total de la gestión presidencial, de la gestión gubernamental”.

No parece haber dudas a esta altura de que la intención primera del mandatario al anunciar tan drástica decisión no era propiamente abandonar el poder, sino ampliar su espacio político tras la ratificación del congreso y despejar algo el desolador panorama descrito por su propio canciller. Razones no le faltaban para aventurarse a semejante

empresa: nacido de las cruentas revueltas populares que terminaron con el mandato de Sánchez de Lozada, el gobierno de Mesa nació débil, carente de estructura política propia y de base alguna de apoyo en el Congreso. Debía enfrentar casi permanentemente la presión de grupos que buscaban la nacionalización de los recursos energéticos o el aumento de las regalías por su explotación; hacer frente a las reivindicaciones de autonomía de ciertas regiones como

El presidente Mesa fue claro en su discurso: llegaba al límite de su trabajo, en su estancia en el poder había atendido más de 800 conflictos, “por todo el momento que estamos viviendo, y porque como persona tengo que ser consistente éticamente, tengo que decir que yo no voy a gobernar en función de las locuras que me plantee cualquier sector”.

Santa Cruz de Sierra y lidiar con los bloqueos y movilizaciones de los líderes de la localidad del Alto para lograr la rescisión de un millonario contrato con una empresa francesa de aguas. Sumergido en este escenario debía avanzar a su vez con la agenda de gobierno comprometida en octubre de 2003, consistente en la sanción de una nueva ley de hidrocarburos y la convocatoria a una asamblea constituyente. Dos temas por demás polémicos y sobre los que no parece existir el más mínimo consenso (nisiquiera el referéndum de julio de 2004 {ver Alles Santiago, “Política e hidrocarburos en días convulsionados” en “Paper No. 15”} fue capaz de arrojar luz sobre la cuestión energética). En definitiva, la apuesta del presidente Mesa parece

haber sido la de forzar al congreso a reconocer su liderazgo y a los distintos grupos sociales a buscar soluciones de compromiso, amenazando con el caos que su renuncia probablemente desataría.

En un principio, la estrategia parecía arrojar los resultados esperados. Por un lado, el mandatario fue ratificado en forma unánime por el congreso. Incluso los representantes del MAS, alguna vez aliados del gobierno pero ahora en la oposición, votaron por su continuidad. Quedaba claro que en las vigentes circunstancias, y más por ausencia de reemplazos que por virtudes propias, el único capaz de mantener un mínimo de gobernabilidad en Bolivia era el Presidente Mesa. A su vez, se lograba articular una mínima agenda de gobierno con las principales fuerzas políticas. El primer mandatario firmaba un acuerdo con seis de las ocho fuerzas con representación parlamentaria (con excepción del MIP y el MAS, que mantuvo irreductible su posición frente a la cuestión de hidrocarburos). El mismo giraba alrededor de cuatro puntos: la sanción de una nueva ley de hidrocarburos, el establecimiento de una agenda electoral que contemplara la convocatoria a una asamblea constituyente y elecciones regionales, convocar a un

¹ Como se recordará esta localidad, distante pocos kilómetros de La Paz, fue el escenario privilegiado de las manifestaciones populares que terminaron con el gobierno de Sánchez de Lozada en octubre de 2003.

“Acuerdo Nacional” y la adopción de medidas contra los bloqueos.

Envalentonado con el rechazo de su renuncia y por las muestras de apoyo popular que se vieron durante el tránsito legislativo de su dimisión, Carlos Mesa llamó a la población a manifestar públicamente su rechazo a los cortes como mecanismo de presión política. “No a los bloqueos, sí a la paz”, pediría más tarde el presidente desde el balcón presidencial.

Sin embargo, y casi inmediatamente, los avances logrados fueron desdibujándose. En primer lugar, el diputado Evo Morales, haciendo caso omiso del pedido presidencial y estrenando alianza con sectores sindicales, universitarios y agrupaciones indígenas, anunciaba el recrudecimiento de las movilizaciones y bloqueos como forma de protesta al acuerdo alcanzado por la dirigencia política, especialmente en el tema energético. “Mientras el Parlamento no apruebe esta ley (de hidrocarburos), las movilizaciones continuarán” desafiaba Morales. Si las esperanzas del mandatario para disuadir a estos grupos estaban centradas en la manifestación a la que el mismo había convocado se equivocó, ya que la

misma, si bien concentró gente en varias ciudades del país, distó de ser una movilización multitudinaria. Fracasó asimismo un intento de acercamiento que ensayaron Mesa y Morales al reunirse para discutir los puntos en conflicto. El diputado socialista abandonaba la reunión ratificando los bloqueos y llamando a extender los cortes de ruta. Días más tarde, otra cumbre convocada en Cochabamba por organizaciones de defensa de derechos humanos naufragaba por la inasistencia del gobierno, que justificó su decisión en la negativa de la Iglesia Católica y “otras instituciones fundamentales de la sociedad” a formar parte de las discusiones. Pero el golpe final a las conquistas oficiales la dió la Cámara de Diputados al dar media sanción a la ley de hidrocarburos, en una versión nociva a los intereses del gobierno y que lo llevo a denunciar la violación del acuerdo alcanzado apenas días antes.

Cabe en este punto detenerse sobre la controvertida ley de hidrocarburos, que ha sido eje del conflicto en estas últimas semanas y promete seguir siéndolo en el futuro próximo. La sanción de la misma ha estado en el centro de la agenda de gobierno de Mesa desde sus inicios. Este compromiso, tomado casi forzosamente en aquellos complicados días de octubre, y su difícil solución, llevó al gobierno a someter los principales lineamientos de la política energética a un referéndum allá por julio de 2004. A través de este

mecanismo, las tesis oficiales fueron respaldadas por la población, frente a los grupos más radicales que intentaron incluso hacer naufragar su realización. Sin embargo, la consulta no fue suficiente para dar acabada solución a la cuestión energética, sobre todo porque el gobierno, en busca de un consenso que no existía, fue lo suficientemente amplio en sus interrogaciones como para dar lugar a la ambigüedad. Esto es especialmente claro en el caso del ítem 5, en el que se le preguntaba a la población si estaba de acuerdo con que Bolivia cobrara impuestos y/o regalías a las empresas petroleras, llegando al 50 por ciento del valor de la producción del gas y el petróleo a favor del país. La falta de definición a este respecto, originó una pugna en el seno del congreso entre dos proyectos alternativos. El oficial, que establecía el pago de regalías (que se cobran en boca de pozo) por 18% y 32% en impuestos, aunque de forma progresiva y deducibles del total por diversos conceptos. Y el impulsado por Morales, que proyectaba el cobro de 50% de regalías y que el gobierno consideraba de imposible aplicación. Dado que de ser sancionado, violaría derechos adquiridos por parte de las compañías explotadoras y generaría una masa de indemnizaciones imposibles de ser adsorbidas por el estado boliviano.

Tras el acuerdo alcanzado con la cúpula del congreso, parecía que se impondría una versión más cercana a la posición del presidente Mesa. Sin embargo, los legisladores optaron por sancionar un proyecto que, pese a establecer 18% de regalías y 32% de impuestos, de hecho era prácticamente igual al planteado por Morales.

El presidente Mesa respondió al desaire de la cámara de diputados con otra medida drástica: tras afirmar que no promulgaría una ley que considera “suicida e inviable”, propuso al congreso anticipar las elecciones generales para poder así abandonar el cargo antes de su término

legal, en agosto de 2007. A su vez, afirmó que la ilegitimidad del congreso, compuesto por partidos desacreditados, hacia imposible seguir gobernando el país. Mientras en la sede legislativa se deliberaba sobre la proposición del presidente, circulaban rumores de que este presentaría su renuncia irrevocable si los legisladores no hacían lugar a su pedido. Finalmente, el congreso declaró “inaceptable la solicitud del presidente de la república para que este Poder Legislativo dicte una ley interpretativa del artículo 93 de la Constitución Política del Estado, por carecer la misma de toda base legal y por ser contraria a la Constitución”. No faltaron en este punto duras críticas enderezadas contra Mesa, acusándolo

Tras el acuerdo alcanzado con la cúpula del congreso, parecía que se impondría una versión más cercana a la posición del presidente Mesa. Sin embargo, los legisladores optaron por sancionar un proyecto que, pese a establecer 18% de regalías y 32% de impuestos, de hecho era prácticamente igual al planteado por Morales.

de querer forzar un proceso eleccionario que eventualmente podría dejarlo en mejor situación, si se presentara como candidato. Lo cierto es que pese a un nuevo revés, el presidente decidió continuar en el cargo, argumentó que “una sucesión constitucional en el actual contexto no resuelve el problema esencial que planteé cuando propuse un proceso electoral”, a su vez y aludiendo al levantamiento de los bloqueos de las rutas por parte de la oposición tras la aprobación de la ley en diputados declaró “esta situación de un país que hoy está totalmente desbloqueado es una situación que tenemos que tomar y recuperar rápidamente para establecer un escenario en que todas aquellas dificultades que se nos plantean sean superadas”. Volvió a reafirmar asimismo los cuatro puntos basales de su programa de gobierno, una adecuada ley de hidrocarburos, la convocatoria a la asamblea constituyente, la elección de autoridades regionales por el voto popular y la realización de un referéndum sobre autonomías.

Da la impresión que Mesa se encuentra en el mismo sitio en que se encontraba antes de presentar su renuncia. De que todo lo hecho (y deshecho) desde la primera semana de marzo no redundó en beneficios políticos claros. Los acontecimientos hablan por si mismos, Mesa no pudo generar un movimiento de presión popular sobre aquellos sectores que expresan sus demandas a través de bloqueos y paros, tampoco logró acercar con ellos posiciones; no le fue posible ampliar la base de apoyo legislativo, el acuerdo al que arribó con las principales fuerzas políticas fue efímero. Tampoco pudo evitar el trámite de una ley de hidrocarburos que considera negativa. El espacio acotado político con el que contaba antes de la crisis no se vio ampliado, por el contrario, hay analistas que se atreven a decir que se ha reducido, en parte por la mala impresión que causó en el congreso al acusarlos de incapaces de representación popular y en parte porque las encuestas estarían mostrando un declinio en su popularidad (su principal activo político) en virtud de sus marchas y contramarchas con respecto a la continuidad de su mandato. “Si un presidente que ha recibido un rechazo unánime a su carta de renuncia no tiene autoridad,

Los acontecimientos hablan por si mismos, Mesa no pudo generar un movimiento de presión popular sobre aquellos sectores que expresan sus demandas a través de bloqueos y paros, tampoco logró acercar con ellos posiciones; no le fue posible ampliar la base de apoyo legislativo, el acuerdo al que arribó con las principales fuerzas políticas fue efímero.

es imposible pensar que alguien pueda gobernar en condiciones mejores que ésta”, con esta frase intentaba Mesa llamar a Evo Morales a recapacitar sobre sus posiciones, sin embargo, parece haberse convertido en un acertado diagnóstico de su propia situación.

En el convulsionado escenario boliviano parece haber solamente una certeza, y es que el conflicto en rededor del tema energético lejos esta de haber sido superado. La cámara de senadores tiene en sus manos la polémica ley de hidrocarburos y se especula que su tratamiento demandará algunas semanas. El presidente Mesa ya ha anunciado que, en las actuales condiciones, no esta dispuesto a promulgar el proyecto votado por diputados. Habrá que ver si la cámara alta es más sensible a la posición oficial.

Pero en el hipotético caso de que esto suceda, Bolivia seguramente deberá enfrentar la reacción de los grupos ya movilizados a favor de la iniciativa aprobada. A su vez quedan aun por zanjar otra serie de importantes cuestiones al margen del ítem hidrocarburos. La discusión sobre las autonomías regionales, que ya generó sobre principios de año una crisis en Santa Cruz de la Sierra, promete ser especialmente otra fuente de desencuentros para la fragmentada dirigencia política boliviana y pone sobre la superficie las enormes diferencias sociales y económicas entre el oriente y el occidente del país. Es en este debate donde algunos analistas ven el mayor peligro no solo para la estabilidad democrática del país mas pobre de Sudamérica sino para su propia supervivencia a nivel estatal².

Fuentes:

González Urrutia, Edmundo, “Solo una tregua”, en www.nuevamayoria.org, 29 de marzo de 2005.

Molina, Fernando, “Hidrocarburos: la manzana de la discordia” en www.nuevamayoria.org, 21 de marzo de 2005.

Diario La Nacion y El Clarín, de Buenos Aires; Diario La Razón, de La Paz; Diario Los Tiempos, de Cochabamba; www.bbcmundo.com; www.elnuevoerald.com.

² Ver Falcoff, Mark, “¿Los últimos días de Bolivia?” en “Paper Latinoamericano No. 13”, Mayo de 2004.

Brasil camina sus propias piernas

“Mis amigos y mis amigas, Es con gran satisfacción, que en nombre del Presidente Lula, comunico en este momento al pueblo brasileño, un hecho de mayor relevancia. Después de tantos años dependiendo de los préstamos del Fondo Monetario Internacional (FMI), nuestro país finalmente ha conseguido equilibrar sus cuentas y su balanza de pagos, colocando su economía en orden y no precisando más la ayuda del FMI. El próximo jueves 31 de marzo, se cierra nuestro último compromiso. Y ya informamos al Fondo que el mismo no será renovado”. Con estas palabras, pronunciadas a través de la red nacional de televisión el lunes 28 de marzo, el ministro de economía Antonio Palocci, anunciaba la decisión del gobierno brasileño de no renovar el acuerdo que regía las relaciones con el fondo desde fines de 2002. El mismo había sido firmado en momentos en que el país atravesaba difíciles momentos de inestabilidad financiera y política y había puesto a disposición de las autoridades brasileñas, una línea de crédito cercana a los US\$ 40.000 millones.

En el mismo discurso el ministro de hacienda esbozó las razones de semejante decisión: la mejora del perfil del endeudamiento público, así como el desempeño favorable de la mayoría de los indicadores económicos, “Nuestros indicadores son los mejores en 20 años. Tuvimos el mayor crecimiento en 10 años, la producción industrial está en el mejor nivel en 18 años”. “Pero no hay que olvidar que si conseguimos todo eso fue con gran esfuerzo y responsabilidad fiscal”. Y aquí es donde introdujo una cuestión central: “Por lo tanto, el control del presupuesto y de los gastos públicos será hecho con disciplina y transparencia. Y eso garantizará la continuidad del equilibrio económico necesario para que Brasil crezca”. El ministro aprovechó toda oportunidad para dejar fuera de toda duda que la no renovación del acuerdo no significaba relajar la política fiscal: en una audiencia pública de la Comisión de Asuntos Económicos del Senado, Palocci advirtió “tenemos que ser muy cautelosos con los gastos ahora que no estamos más con el Fondo. Podemos gastar mucho mas de aquí en adelante, pero creo que eso sería errado”. Momentos antes un grupo de senadores había pedido al ministro que apoyase la creación de un nuevo

fondo de educación (Fundeb).

El presidente Lula también se refirió al significado de tan crucial medida “hoy, al comunicar al comunicar al fondo que no vamos a hacer un acuerdo más, lo hacemos con las serenidad y la tranquilidad de un gobierno que conquistó con el sacrificio de todo el pueblo brasileño, el derecho de andar con las propias piernas”. De todos modos, y tras afirmar “que se está en condiciones de cuidar a Brasil siguiendo orientaciones propias”, refrendó el compromiso de su administración con la responsabilidad fiscal, preocupación compartida con su ministro: “nadie precisa decirnos que tenemos que ser responsables con los gastos públicos. Eso lo aprendemos dentro de casa”.

Tanto en las declaraciones del presidente, como en las del ministro de economía, se destacaron frases de agradecimiento al papel del Fondo en la economía brasileña de los últimos años, gesto impensado de parte de hombres del PT apenas unos años atrás. Palocci afirmó que “no podríamos, entretanto, jamás dejar de reconocer la gran importancia de la ayuda del FMI en momentos muy difíciles de la historia de nuestro país”. Menos directo en su reconocimiento, Lula aseguro que “aunque no fuimos nosotros los que hicimos los acuerdos, todo el mundo sabe que Brasil quebró tres veces y que el Fondo dio sustentabilidad al país”. Antes, había dicho que “si pensáramos como hace 10 o 15 años, conozco gente aquí en el plenario y en mi gobierno que estaría gritando en la calle: Fuera FMI”.

También se cuidaron las autoridades económicas de dejar claro que la no renovación del acuerdo no significa una ruptura con el Fondo y a que su vez, se dejaba abierta la puerta para eventuales nuevos entendimientos en el caso de ser necesarios. “Nuestra relación con el Fondo es bastante positiva” dijo Palocci. Brasil continúa en negociaciones para la creación de una línea de créditos de emergencia para socorrer a países en situación de crisis y participando de un proyecto piloto para la exclusión de inversión pública productiva del cálculo del déficit fiscal. A este respecto, cabe decir que circularon rumores de que la decisión de Brasil de no renovar habría estado motivada en la negativa del fondo a ampliar este dispositivo, versión que fue terminantemente negada por el

De todos modos vale resaltar que la resolución de terminar el acuerdo no fue sorpresiva. Las discusiones en el ámbito del gobierno sobre la cuestión datan de largo tiempo, así como la intención de despegarse del fondo. Incluso en septiembre de 2003 el acuerdo estuvo cerca de no ser prorrogado, aunque finalmente las autoridades económicas se inclinaron con un entendimiento preventivo. El ministro Palocci recordó que él mismo había asegurado por aquellos días que ese acuerdo sería el último firmado y por lo menos desde septiembre de 2004 venía afirmando que no habría renovación.

titular de economía.

De todos modos vale resaltar que la resolución de terminar el acuerdo no fue sorpresiva. Las discusiones en el ámbito del gobierno sobre la cuestión datan de largo tiempo, así como la intención de despegarse del fondo. Incluso en septiembre de 2003 el acuerdo estuvo cerca de no ser prorrogado, aunque finalmente las autoridades económicas se inclinaron con un entendimiento preventivo. El ministro Palocci recordó que él mismo había asegurado por aquellos días que ese acuerdo sería el último firmado y por lo menos desde septiembre de 2004 venía afirmando que no habría renovación.

Quizás por ello la reacción al anuncio, tanto en el ámbito interno como externo, fue moderada cuando no positiva. El mercado financiero local tomó la noticia con tranquilidad, estimulado asimismo por las señales de Palocci de que el rumbo económico se mantendría pese a todo. El Director Gerente del FMI, Rodrigo de Rato, afirmó que la decisión de Brasil con respecto al organismo que preside “refleja los resultados impresionantes, generalmente mas allá de las expectativas, de la estabilización macroeconómica de Brasil y de las políticas de reforma apoyadas por el acuerdo actual”. Por su lado, el Secretario de Tesoro de los Estados Unidos, John Snow, mostró su entusiasmo “fue una noticia extraordinaria, una marca de realización financiera para el país y el gran crédito va para el Presidente Lula por este éxito”. En Europa y en América Latina también se hicieron escuchar voces de apoyo a la decisión brasileña, especialmente desde Argentina, que negocia por estos días un difícil acuerdo con el Fondo.

Como suele suceder en estos casos, la decisión brasileña en torno a su relación con el fondo admite varias lecturas. Entre quienes defienden la medida se argumenta que se ha entrado en un periodo de mayoría de edad administrativa,

Brasil tendrá que demostrar de manera aun más fuerte su compromiso con la políticas que viene ejecutando”. Este parece ser el eje central de la cuestión al margen de los análisis e interpretaciones que se puedan hacer.

en el que el propio Brasil es el ejecutor y auditor de sus propias políticas. Sería una forma de mostrar que el compromiso con el rumbo hasta ahora adoptado (sobre todo en materia fiscal) no es producto de una imposición externa sino de una convicción interna. Por otro lado, las mayores críticas a la medida se han basado en una cuestión de oportunidad, muchos analistas se preguntan si es conveniente prescindir de la ayuda financiera de fondo, en momentos en que la situación financiera internacional parece estar mudando en perjuicio de las economías emergentes. Interrogado a este

respecto, el ministro Palocci afirmó que las condiciones de la economía brasileña para hacer frente a dificultades externas son mucho mejores ahora de aquellas de los últimos 4 o 5 periodos en que se debió acordar con el Fondo.

En la opinión del ex Jefe de la División del Hemisferio Occidental del FMI, Claudio Loser, “las ventajas (de la no renovación) están más en la política interna, de poder decir que el país no necesita más del Fondo. Las desventajas pueden manifestarse en el mercado de capitales delante de cualquier señal de relajación de la política económica, lo que significa que, sin el aval del Fondo, Brasil tendrá que demostrar de manera aun más fuerte su compromiso con la políticas que viene ejecutando”. Este parece ser el eje central de la cuestión al margen de los análisis e interpretaciones que se puedan hacer.

Fuentes:

Fleischer, David, Brasil Focus Weekly Report, 1 de abril de 2005.

Diario La Nación y Clarín, de Buenos Aires; Diario Folha y Estado, de Sao Paulo; Jornal O Globo; www.bbcmundo.com; www.elnuevoherald.com.



MITOS DEL MILENIO

El fin del trabajo y los nuevos profetas del Apocalipsis

Mauricio Rojas

Con la colaboración de Pedro Isern

Demuele la falacia de que ya sea por el avance tecnológico o por la globalización, o por ambas causas, estamos frente al fin del trabajo.

Samuel Brittan, Financial Times (Inglaterra)

ADQUIÉRALO por sólo \$10 en la sede de CADAL

Las armas de Chávez

Los cruces de declaraciones entre las administraciones del Presidente Bush y el Presidente Chávez forman ya casi parte de la cotidianeidad del paisaje latinoamericano. No es poco frecuente escuchar críticas del gobierno norteamericano sobre la situación y marcha de la democracia venezolana o al mandatario sudamericano denunciar complots políticos en contra de su continuidad organizados o alentados desde los Estados Unidos (en los últimos tiempos ha agregado al menú un presunto plan para liquidarlo). Sin embargo, en las últimas semanas, parece haber habido una escalada en el enfrentamiento, motivada principalmente en la preocupación del gobierno de Bush por el anunciado plan de Chávez de renovar el equipamiento militar de sus fuerzas armadas.

En efecto, el mandatario venezolano ha dado a conocer la adquisición de 100.000 fusiles AK-47 y 40 helicópteros rusos (se especuló inclusive con la posibilidad de que Rusia vendiera a Chávez algunos de los sofisticados MIG-29). Ha anunciado a su vez haber entrado en negociaciones con el gobierno brasileño para la compra de aviones “Súper Tucanos” de la empresa Embraer. Mas aún, en la última semana de marzo, y teniendo como escenario la cumbre de la que participaron los mandatarios de Brasil, Colombia, Venezuela y España, Chávez cerró con el premier ibérico Rodríguez Zapatero un acuerdo de US\$ 1.700 millones para la adquisición de 4 patrulleras de vigilancia costera, 4 corbetas oceánicas, 2 buques tanqueros, 10 aviones de transporte y 2 aviones de vigilancia.

La administración republicana teme que la campaña de rearme de Chávez se convierta en un foco de inestabilidad para la región o en el puntapié inicial para una carrera armamentista en Latinoamérica. A través de declaraciones de varios de sus funcionarios ha dejado clara su posición: “No puedo imaginar para qué necesita Venezuela 100.000 fusiles AK-47”, afirmó el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld en visita a Brasil sobre fines de marzo, “Tampoco puedo imaginarme que eso sea bueno para América latina”, agregó. Semanas atrás, en declaraciones al británico Financial Times, otro funcionario, Roger Pardo Maurer, subsecretario de Defensa adjunto para América Latina, había mostrado la preocupación norteamericana de que Chávez pueda subvertir a países de la región a través del apoyo a grupos radicales. Chávez está empleando una “estrategia de hiena”, advirtió. La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, ya había acusado en enero a Venezuela de “ejercer una influencia desestabilizadora en Latinoamérica”.

La preocupación por el rearme de Chávez ha encendido las alarmas no solo en los Estados Unidos, sino también en parte de la castigada oposición venezolana y en sectores

políticos colombianos. Los primeros acusan a Chávez de militarizar la sociedad venezolana y crear milicias populares con el objetivo único de sostener su poder. Mientras que los segundos, o bien desconfían de las intenciones del mandatario venezolano (no son pocos los que aseguran la existencia de vínculos cercanos entre la administración chavista y por ejemplo, las FARC) o bien temen que las armas caigan en poder de grupos que podrían atentar contra el gobierno y la sociedad colombiana, otra vez las FARC. La propia canciller colombiana, Carolina Barco afirmó “Muy importante es tener claro qué se hace con las armas que van quedando en desuso. La preocupación que se tiene es cuando las armas salen de uso quién se va a hacer cargo”.

A idéntico blanco apuntaron las palabras del Presidente Álvaro Uribe, cuando pidió a sus colegas en el marco de la cumbre ya apuntada que se tenga cuidado “para evitar que a los terroristas colombianos lleguen armas nuevas o viejas”.

Por su parte, el Presidente Chávez, ha afirmado el derecho de Venezuela como estado soberano de renovar sus fuerzas armadas y ha negado que esto represente un peligro para la estabilidad regional o el inicio de una carrera armamentista en Latinoamérica.

Refiriéndose específicamente al acuerdo con España declaró que los elementos adquiridos “se utilizarán para fortalecer la capacidad de custodia, de patrullaje, de vigilancia, de lucha contra tantos vicios como el narcotráfico, la delincuencia internacional el contrabando”. “No son armas para la guerra, son equipos para la paz” aclaró.

En los gobiernos latinoamericanos no parece haber habido especial preocupación por el plan de rearme de Venezuela o por lo menos esta no se ha hecho pública (al margen de las declaraciones de las autoridades colombianas). El Presidente Lula por ejemplo, en el marco de la cumbre arriba referida, expuso su solidaridad a Chávez a la vez que afirmó que “no aceptamos difamaciones contra compañeros. Venezuela tiene derecho a ser un país soberano”. Sin embargo, se supo que tanto a la administración del Partido de los Trabajadores, como a la del Presidente Kirchner en Argentina les ha sido transmitida la preocupación del Presidente Bush por la situación venezolana y se les ha pedido que contengan a Chávez y contribuyan así a la estabilidad de la región. Habrá que ver que rumbo toman.

Fuentes:

Fleischer, David, Brasil Focus Weekly Report, 1 de abril de 2005.

Diario La Nación y Clarín, de Buenos Aires; O Estado de Sao Paulo; www.bbcmundo.com; www.elnuevoherald.com.

Soledad Alvear:

La moderación y sensatez al poder

La candidata presidencial de la Democracia Cristiana, Soledad Alvear, es un atípico ejemplo para la política latinoamericana: dirigente previsible, meticulosa, analítica y ordenada, su desempeño profesional ha estado totalmente alejado de cualquier tipo de improvisación. Es consecuentemente paradójico que una política de una larga y exitosa trayectoria, que ha demostrado un pleno dominio de lo macro y lo micro en cada uno de los lugares claves que le ha tocado estar, enfrente en estos primeros meses del 2005 una situación electoral tan delicada precisamente por el profundo contraste que su carácter tiene en comparación al de su contrincante, la candidata socialista Michelle Bachelet. Así, la importante distancia que las últimas encuestas muestran en las primarias de la Concertación (64% a 22%, según la última encuesta de Datavoz¹) es en parte explicada por la espontaneidad, frescura y simpleza de Bachelet, en oposición a una supuesta actitud más distante, profesional y fría de Alvear.

En este contexto, la coyuntura es sumamente compleja para la candidata de la DC, ya que si esa amplia diferencia se debe a la supuesta simpatía de una y a la supuesta frialdad de la otra, será difícilmente remontable para Alvear, en tanto es muy improbable que una circunstancia electoral la lleve a modificar su temperamento. Así, su capacidad y carácter han sido y son las principales condiciones que explican su exitosa carrera hasta el presente. Extrañamente, podrían también terminar explicando un importante fracaso en las elecciones primarias del 31 de julio.

En este artículo haremos hincapié en el carácter, capacidad y profesionalismo de Soledad Alvear como condiciones decididamente beneficiosas para ella, para su partido y (debido a su función gubernamental) para su país.

Un poco de historia

Maria Soledad Alvear Valenzuela nació el 17 de septiembre de 1950. Casada con un importante dirigente de la Democracia Cristiana, Gutemberg Martínez (quien tuvo un trascendente papel en la articulación de la oposición para enfrentar a Pinochet en el referendo de 1988), egresó como abogada de la Universidad de Chile en 1972. Se desempeñó en distintas funciones públicas y privadas. Comenzó su carrera profesional en el Instituto de Financiamiento Cooperativo IFICOOP Ltda. y Financiera FINTESA desde 1973 a 1975. Dirigió su Estudio particular entre 1978 y 1990. Fue consultora de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en 1990. A su vez, fue Profesora titular de la Cátedra de "Derecho Civil"².

Desde 1990 ha trabajado en puestos claves de las 3 administraciones sucesivas de la Concertación. Si bien su desempeño como Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer (gobierno de Aylwin Azócar, 1991-1994) y como Ministra de Justicia (gobierno de Frei Ruiz-Tagle, 1994-1999) probaron su capacidad para dirigir con eficiencia y profesionalismo tareas diversas, su actuación más delicada y conocida se dio durante la compleja negociación para alcanzar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE.UU. en 2003 y un Acuerdo de Asociación con la Unión Europea en 2002, cuando ejercía el cargo de Ministra de Relaciones Exteriores (gobierno de Lagos Escobar, 2000-2004).

En el interin es necesario notar una tarea pública no gubernamental muy breve. En la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 1999, el candidato de la Concertación Ricardo Lagos obtuvo una mínima ventaja sobre el candidato opositor de la Alianza por Chile Joaquín Lavín. La campaña electoral para la segunda vuelta, el 16 de enero de 2000, se transformó en una carrera contra el tiempo para la coalición oficialista ya que un sector decisivo del electorado de la Democracia Cristiana, que había votado por Lagos en la primera vuelta, estaba listo para seguir la "ola del cambio" y darle una oportunidad a Lavín. La condición de laico y socialista de Lagos generaba demasiadas dudas en esa parte católica y conservadora de la DC que crecientemente veía en el candidato de la Concertación alguien tan o más lejano que el ascendente Lavín.

Aquí aparece la figura de Soledad Alvear, quien asume la Dirección Ejecutiva de la Campaña Presidencial de Ricardo Lagos e introduce una agresiva estrategia puerta a puerta en las circunscripciones claves. Más importante aún, Alvear aparece en los medios impresos y televisivos al lado de la figura del candidato Lagos, acompañándolo en sus caminatas, actos y presentaciones. Esto contribuyó fuertemente a regenerar en dicho electorado católico la empatía ausente. No es exagerado decir que esta movida entre la primera y segunda vuelta electoral evitó que la oposición llegara a la presidencia en el 2000, y que para ello fue decisivo el papel de Soledad Alvear.

La Difícil Coyuntura

Esta historia es necesario relatarla a partir de los inesperados acontecimientos sucedidos en Chile a mediados de marzo de 2005: durante una entrevista televisiva, Ricardo Lagos sostuvo que si bien (dado su investidura) debía mostrar

prescindencia en las primarias de la Concertación, él no tenía dudas que en 1999 el Presidente Frei-Ruiz Tagle votó en las elecciones internas por el candidato de su partido (la Democracia Cristiana) y no por el candidato del Partido Socialista y Partido por la Democracia (es decir, el mismo Lagos). Así, dio a entender su implícito apoyo a Michelle Bachelet. Pero el problema se profundizó: en la misma semana, Soledad Alvear realizó una jugada estratégicamente importante, mencionando que en su eventual gobierno no tendría problemas en convocar a un dirigente como Sebastián Piñera, principal dirigente de Renovación Nacional³, debido a que es necesario gobernar con personas capaces que compartan ideas similares, independientemente de su filiación partidaria. Extrañamente, el presidente Lagos volvió a inmiscuirse en las internas al disentir, opinando que se debe gobernar con gente del mismo espectro político.

Es necesario mencionar este hecho por las implicancias que tiene para el futuro de Soledad Alvear y, principalmente, de la Concertación. Dado que es difícil pensar que un político de la capacidad de Ricardo Lagos tropiece con la misma piedra en menos de una semana, es posible especular que el presidente está intentando capitalizar al menos parte del muy probable triunfo de Bachelet, tanto en las primarias como en las elecciones generales. La apuesta de Lagos sería aquí quedar posicionado como el lógico candidato de la Concertación para las elecciones del 2010. Pero si bien parece claro que sería un excelente candidato, semejante situación generará al interior de la coalición, principalmente en la DC, una inquietud interna que necesariamente hará replantear el futuro de esa alianza. Aquí entra la importante mención sobre Sebastián Piñera hecha por Soledad Alvear: es que si el binomio PS-PPD comienza a mostrar cierta hegemonía dentro de la coalición, que a su vez intentará ser reafirmada a partir de la paulatina incorporación de sectores mas a la izquierda, es lógico pensar que una nueva alianza informal esté en gestación entre la mayor parte de la DC y los sectores moderados del centro-derecha, siendo Sebastián Piñera un representante cabal de esta tendencia. En esta nueva e hipotética informal configuración Soledad Alvear tiene mucho para ganar en el mediano plazo y mucho para perder en el corto, si es que llegara a sufrir una aplastante derrota el próximo 31 de julio. Si bien es desaconsejable realizar pronósticos políticos para el mediano y largo plazo, podemos conjeturar que difícilmente se encuentre una mejor candidata para una virtual alianza entre una mayoría de la DC y una mayoría de simpatizantes de Renovación Nacional.

Soledad Alvear tiene una historia y un presente que la muestran como una dirigente sensata y moderada en un país donde la sensatez y la moderación han sido las principales características que explican la exitosa experiencia económica-institucional vivida desde 1990 en adelante. Por ende, resulta un tanto paradójico la difícil coyuntura en que la han situado las encuestas. Podemos sintetizar este complicado presente de

Alvear en el siguiente párrafo del analista político Héctor Soto: “La gran pregunta que deja planteado el caso de Soledad Alvear es en qué momento y por qué su nombre y su imagen se desvanecieron súbitamente en las encuestas, luego de haber sido por espacio de años la figura de mejor desempeño dentro del oficialismo en los estudios de opinión. Según la encuesta CEP, en sólo dos años, entre diciembre del 2002 y diciembre del 2004, Soledad Alvear perdió más de la mitad del potencial electoral que se le atribuía al bajar del 37% al 17% la proporción de encuestados que la veía como próxima Presidenta. En el mismo período, sin moverse de su escritorio, Michelle Bachelet levantó vuelo desde el 2% al 43%... Una explicación es que, en función del cambio cultural ocurrido en los últimos años, el país ande buscando ahora para presidente no a la más aplicada del curso, sino a la mejor compañera. Alvear se sabe la letra a la perfección, pero al parecer Bachelet es mucho más entonada. La gente podría estar premiando la receptividad de Michelle Bachelet, su espontaneidad risueña, su tesón de mujer sufrida y su forma sencilla y convincente de expresarse. La ex canciller no tiene ventajas de carácter en este plano y creer que vencerá a su contendora en los debates porque es capaz de citar de memoria las cláusulas del TLC con Estados Unidos o los libretos de su oferta programática es simplemente exagerar el peso de la racionalidad en la política. Casi nunca la gente se siente interpretada por quienes se saben las cosas por libro.”⁴ Más allá de esta rigurosa síntesis sobre la difícil coyuntura por la que atraviesa la candidata, Alvear es una excelente opción para aglutinar en el mediano plazo una posible alternativa de centro-centro dentro de una coalición como la Concertación que parece encontrarse en un proceso de expansión, tanto hacia la izquierda como hacia la derecha. En este sentido, los mecanismos de contención y moderación, que siempre han funcionado eficientemente dentro de la Concertación, podrán volver a hacerlo, aunque esta vez de manera más informal, cuando el corrimiento hacia la izquierda de una parte de la coalición sea espontáneamente equilibrado por el informal corrimiento hacia el centro de la otra parte de la coalición.

El Currículum pasado y presente de Soledad Alvear la muestra como el mejor ejemplo de aquello que más adecuadamente califica el derrotero de la Concertación desde 1990 en adelante: la búsqueda de la moderación y el consenso.

Notas:

¹ Diario “El Mercurio”. 25 de marzo de 2005. Santiago-Chile.

² Fuente: Currículo Vital de Soledad Alvear. En

<http://www.soledadalvear.cl>

³ Renovación Nacional compone la Alianza por Chile junto a la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI). El candidato de esta Alianza, Joaquín Lavín, es miembro de la UDI y ésta expresión política ha tenido a lo largo de los años continuas discusiones públicas con Piñera.

⁴ Héctor Soto: “¿Qué puede hacer Alvear (en 120 días) para remontar?”.

El ascendente debate sobre “la soberanía compartida”: sus implicancias en América Latina.

por Fabián Calle*

Si bien siempre es importante leer las reflexiones de Stephen Krasner, uno de los más destacados especialistas en Relaciones Internacionales de los EE.UU. y distinguido Profesor de la Universidad de Stanford, su reciente designación como asesor en el área de Planeamiento Estratégico del nuevo Secretario de Estado de los EE.UU.,

Condoleezza Rice (ex discípula y posterior colega de Krasner en Stanford), hace que sus palabras y propuestas adquieran una connotación que trasciende lo académico y se adentra en lo político-estratégico.

En su condición de una de las plumas más agudas de la corriente realista (con su énfasis en el balance de poder, el interés nacional, los tableros estratégico-militares, su visión escéptica sobre las organizaciones e instituciones internacionales y sus advertencias acerca de la necesidad de no caer en cruzadas ideológicas o moralizadoras en el complejo y anárquico sistema internacional), S. Krasner nos ha brindado recientemente un artículo que está llamado a generar un fuerte debate. Se trata de “The case for shared sovereignty”¹, en donde tal como lo expresa desde su título propone un radical cambio en la forma de ver y operacionalizar la cuestión de las soberanías nacionales en un sistema

internacional globalizado y enmarcado por el post 11/9.

En un prolijo recorrido sobre la bibliografía de consolidación democrática (cita a M. Lipset, G. O'Donnell, A. Przeworski, S. Huntington, entre otros), el autor nos coloca frente a un argumento que parece ser el núcleo duro de la “grand strategy” del gobierno de G.W. Bush y que seguramente lo trascenderá en su condición de estrategia a largo plazo de los EE.UU: la extensión de la democracia y en especial de las instituciones y procedimientos que le dan sustentabilidad en el largo plazo a esta forma de gobierno. Marcando un contraste enriquecedor con respecto a la postura de expansión cuantitativa de la democracia que caracterizó la década de los '90 (lo que hoy se llaman democracias electorales o democracias iliberales o no republicanas), la nueva y ascendente visión de Washington es la de colocar más atención en el Imperio de la Ley, la calidad institucional y la lucha contra la corrupción o lo que Krasner llama “buen gobierno”. El mismo es visto como un instrumento clave en el mediano y largo plazo en lograr mayores grados de

estabilidad y fortalecimiento de los Estados y de esa forma potenciar el control sobre los actores del caos (terrorismo, narcotráfico, crimen organizado, etc.).

Dentro de este marco conceptual, Krasner agrega un instrumento por el considerado funcional al logro de esta extensión cualitativa de la democracia en el mundo y como

Marcando un contraste enriquecedor con respecto a la postura de expansión cuantitativa de la democracia que caracterizó la década de los '90 (lo que hoy se llaman democracias electorales o democracias iliberales o no republicanas), la nueva y ascendente visión de Washington es la de colocar más atención en el Imperio de la Ley, la calidad institucional y la lucha contra la corrupción o lo que Krasner llama “buen gobierno”.

forma de socializar y quitar márgenes de maniobra a regímenes no democráticos pero que se ven obligados a establecer relaciones constructivas con Occidente. Se trata del concepto de “soberanía compartida”. Que implica en términos concretos?. En primer termino lo define como la posibilidad (y mutua conveniencia) de un acuerdo entre un Estado débil y con inestabilidades políticas y socioeconómicas de buscar en organismos internacionales reconocidos o en una o más potencias desarrolladas con el propósito de darle un marco de previsibilidad a áreas como la explotación de materias primas estratégicas² (petróleo, gas, minerales, etc.). Otra posible área de “soberanía compartida” en la visión del autor serían las políticas monetarias por medio de la creación de Bancos Centrales independientes y con supervisión internacional. Para Krasner, este tipo de cursos de acción tenderían a potenciar el

avance de mayores grados de institucionalización, la lucha contra la corrupción y alentar prácticas de buen gobierno en diversos países subdesarrollados. En este sentido, retoma una idea fuerza que está ganando creciente espacio: a menores niveles de arbitrariedad y mayor grado de transparencia sobre el control de recursos estratégicos (básicamente el tema del petróleo) se reduce la posibilidad de regímenes cleptocráticos y antidemocráticos (o más bien anti-republicanos con su respectiva división de poderes y la obligación de “rendir cuentas”). Este mejor manejo de los recursos y las riquezas, en su visión, tenderían a potenciar la posibilidad de desarrollo económico y con ello reforzar la estabilidad sociopolítica. Este tipo de escenario, crearía un círculo virtuoso en donde se incrementaría la legitimidad política de los gobiernos, su eficacia y con ello la posibilidad recaudar la cantidad necesaria de impuestos para la seguridad, el desarrollo social, etc.

Promediando el artículo, Krasner destaca la gran compatibilidad que existe entre su propuesta y los pasos

que viene dando la administración de G.W. Bush en especial luego de los atentados del 11/9. Por su parte, en todo momento busca despejar las dudas sobre neoimperialismo que algunos podrían ver detrás de este tipo de estrategias. Para ello, enfatiza en la característica voluntaria del acuerdo de soberanía compartida, aclara que regiría sobre temas puntuales y que la contraparte internacional (una potencia occidental o un organismo internacional) no invertiría grandes sumas de dinero, dado que de ser así su poder e influencia debilitarían al extremo los márgenes de maniobra del Estado débil.

Al momento de citar antecedentes históricos, enumera los casos del Imperio Otomano y un conjunto de potencias europeas a fines del siglo XIX en el área de manejo de default de su deuda externa y el caso del sector de la Defensa Nacional de Alemania Occidental post segunda guerra mundial. A la hora de abordar casos actuales, brinda los de Sierra Leona y las Naciones Unidas en el área del Poder Judicial y del Chad y el Banco Mundial en el sector petrolero. Al llegar a este punto, advierte que los recursos naturales son una “área prometedora” para experiencias de soberanías compartidas. Por último, advierte que todo ello no es una panacea pero sí un instrumento en el avance de regímenes más cercanos a los estándares de democracias provistas de buen gobierno y calidad institucional.

Los argumentos y propuestas de este destacado académico devenido recientemente en funcionario de primer nivel de Departamento de Estado, no dejarán de tener su impacto en nuestra región latinoamericana. En este sentido, diversos países del área comparten el mix de inestabilidad política y socioeconómica y la posesión de recursos naturales estratégicos como el petróleo y el gas (Bolivia, Venezuela, Colombia, Ecuador, etc.). Asimismo, la siempre sensible y sofisticada diplomacia brasileña tenderá a ver y analizar detalladamente esta potencial nueva pata de la “grand strategy” de los EE.UU. post 11/9. La cuestión del Amazonas y temas como la biodiversidad y el agua no dejarán de estar en los debates que se generen alrededor de este ascendente debate.

***Fabián C. Calle** es Investigador Senior del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI). Es miembro de la Carrera de Investigador del CONICET. Desarrolla actividad docente en la Universidad Torcuato Di Tella, la Universidad Católica Argentina y el Instituto del Servicio Exterior de la Nación.

Notas:

¹ Publicado en Journal of Democracy, Baltimore, Han 2005, Vol. 16.

² En un futuro tal vez cuestiones como el agua, la biodiversidad, etc.



CADAL, TIMBRO y DISTALLIBROS
presentan la nueva edición del libro de Mauricio Rojas:

HISTORIA DE LA CRISIS ARGENTINA

Ya está a la venta en las principales
librerías a \$ 13.-

Argentina y Brasil en el mundo luego de la Guerra Fría

Saraiva, Miriam y Tedesco, Laura; “Argentina y Brasil. Políticas exteriores comparadas tras la Guerra Fría”; en PALERMO, Vicente (comp.): Política Brasileña Contemporánea. De Collor a Lula en años de transformación; ITDT-Siglo XXI, Buenos Aires, 2004.

Argentina y Brasil, al igual que el resto de los países de Latinoamérica, han sufrido en las últimas décadas grandes transformaciones, cambios que a grandes rasgos los llevaron de regímenes autoritarios a regímenes democráticos y de economías cerradas y dirigidas a economía más abiertas y de mercado. Estas grandes transformaciones abarcaron asimismo la forma en que concebían y se insertaban en el escenario internacional.

En el trabajo que aquí reseñamos, Miriam Saraiva, del Programa de pos-graduación en historia de la Universidad del Estado de Río de Janeiro y Laura Tudesco, Profesora de Ciencias Políticas en University of East Anglia, Inglaterra, abordan el tema de la política exterior de los dos mayores países de Sudamérica en un análisis de “las diferencias que surgieron

en los años 90 en los lineamientos generales de las políticas exteriores de Argentina y Brasil analizando la percepción de cada país del nuevo orden internacional” (Pág. 476). La relación con los Estados Unidos, las cuestiones de seguridad y las relaciones regionales, serán los indicadores utilizados por las autoras para dar cuenta de estas diferencias.

En un primer apartado (Págs. 477-479), se analizan los cambios en el escenario internacional que influyeron en el comportamiento externo de los países objeto del estudio. La caída de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría y la “estructuración de un orden basado, en lo político, en la defensa de valores vinculados al pluralismo democrático y, en el campo económico, en los preceptos de la economía de mercado” fueron las más significativas mudanzas que Argentina y Brasil debieron enfrentar (Pág. 478).

La caída de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría y la “estructuración de un orden basado, en lo político, en la defensa de valores vinculados al pluralismo democrático y, en el campo económico, en los preceptos de la economía de mercado” fueron las más significativas mudanzas que Argentina y Brasil debieron enfrentar.

La segunda parte (479-492) transita por el análisis del caso argentino, analizando primero la relación entre la profunda crisis que vivió el país a comienzos de la década del 90 y los cambios de su política exterior, en segundo término los cambios experimentados por dicha política, especialmente en el caso de la relación con los Estados Unidos y finalmente las relaciones regionales.

El caso brasileño es tratado en el tercer apartado (492-508) que, como en el caso anterior, “comienza con los factores internos que incidieron sobre la política externa del periodo, volviéndose en seguida hacia la visión brasileña del orden internacional y de la inserción externa del país, hacia las relaciones con los Estados Unidos y dando luego ejemplos del comportamiento externo brasileño,

Finalmente, analiza la relación de Brasil con el entorno regional” (Pág. 476).

Finalmente, toca el turno de las consideraciones finales (508-512). Según la conclusión de las autoras, las políticas exteriores de ambos países sufrieron grandes transformaciones en la década del 90. Sin embargo, el ritmo e intensidad de las mismas varió de acuerdo a los condicionamientos y circunstancias internas de cada estado, entre las que se encuentran la estructura de las corporaciones diplomáticas y la estabilidad de los gobiernos.: “la diferencia más importante fue que Argentina implementó cambios profundos y abruptos (...), en tanto que Brasil (...), experimentó avances y retrocesos que resultaron en un proceso gradual de transformaciones en política exterior.” (Pág. 509).

PAPER

LATINOAMERICANO

Publicación de Análisis Político y Económico Regional

Fuentes, para la elaboración de tablas y gráficos:

Banco Mundial; *World Development Indicators database;* Data & Statistics; <http://www.worldbank.org>, julio de 2003.

Freedom House; *Freedom in the World. The Annual Survey of Political Rights and Civil Liberties;* <http://www.freedomhouse.org>, 2003.

Gwartney, James; Lawson, Robert (2002); *Economic Freedom of the World. 2002 Annual Report;* The Fraser Institute.

O'Driscoll (Jr.), Gerald P.; Feulner, Edwin J.; y O'Grady, Mary A.; *Índice de Libertad Económica 2003;* The Heritage Foundation; Washington D.C., 2003.

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo; *Informe sobre Desarrollo Humano 2003. Los objetivos de Desarrollo del Milenio: un pacto entre las naciones para eliminar la pobreza;* Ediciones Mundi-Prensa; 2003.

Konrad Adenauer; Índice de Desarrollo Democrático.

Marshall, Monty G.; y Jagers, Keith (2001); *Polity IV Project. Political Regime Characteristics and Transitions, 1800-2001;* Center for International Development and Conflict Management – INSCR, University of Maryland; <http://www.cidcm.umd.edu/inscr/polity/index.htm>.

Transparency International; *Informe Annual 2002;* <http://www.transparency.org>; 2002.

Aclaraciones:

Índice de Desarrollo Humano (PNUD, 2000): Rango de 0 a 1, donde 1 indica el mayor nivel de desarrollo humano.

Índice de Libertad Política (FH, 2001-2): Rango de 1 a 7, donde 1 indica la mayor protección y respeto de los derechos y libertades. **Puntuación Política (UM, 2000):** Rango de -10 a 10, donde 10 indica el sistema más democrático, midiendo factores institucionales. **Índice de Libertad Económica (HF, 2003):** Rango de 1 a 5, donde 1 indica el menor grado de interferencia del Estado.

Índice de Libertad Económica (FI, 2002): Rango de 1 a 10, donde el 10 indica el máximo grado de libertad económica.

Índice de Percepción de Corrupción (TI, 2002): Rango de 1 a 10, donde 10 indica el máximo grado de transparencia.

Staff

Director: Carlos Gervasoni. **Jefe de Redacción:** Santiago M. Alles. **Coordinador Editorial:** Matías Franchini. **Redacción:** Pedro Isern y Verónica Domínguez Pousada. **Columnista invitado:** Fabián C. Calle. **Diagramación:** Hernán Alberro. **Webmaster:** Sergio Casais.

Las opiniones vertidas en los artículos por sus autores no necesariamente representan las de los editores de PAPER Latinoamericano o las de CADAL